

Cuba no amenaza, la hostigan

Lo que Washington llama «amenaza» no es más que la voluntad de Cuba de ejercer su soberanía

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

La afirmación del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, de que Cuba representa una amenaza para la Seguridad Nacional de su país, no pasa de ser una cortina de humo, una maniobra propagandística grosera destinada a justificar lo injustificable: el renovado ímpetu intervencionista de la actual administración contra una nación pequeña, bloqueada y hostigada durante casi siete décadas.

¿En qué consiste esa supuesta «amenaza»? Según Hegseth y su correligionario Mario Díaz-Balart –figura recurrente del odio anticubano financiado desde el sur de Florida–, en que barcos rusos, incluido un submarino nuclear, han atracado en puertos cubanos. Permítanme señalar lo elemental: la presencia de buques de una nación amiga en puertos soberanos no es una amenaza contra nadie. Es una práctica normal de relaciones internacionales. Rusia

atraca en La Habana. Estados Unidos atraca en Rota, en Yokosuka, en Baréin. ¿Acaso España, Japón o Baréin son por ello «amenazas» para el resto del mundo? Por supuesto que no. La hipocresía es mayúscula.

Cuba no tiene bases militares extranjeras en su territorio, excepto la que el propio EE. UU. mantiene ilegalmente en Guantánamo. No tiene flotas desplegadas en el Golfo de México. No amenaza a ningún estado vecino con invasión, bloqueo ni derrocamiento. Todo lo contrario: quien ha sufrido invasiones (Playa Girón), intentos de asesinato de sus líderes (más de 600 atentados documentados contra Fidel Castro), un bloqueo económico genocida aún vigente, y ahora amenazas explícitas de «tomar el control» de la Isla, es precisamente Cuba. La amenaza real viene del norte, no del sur.

La denominación selectiva de Washington de que Cuba constituye una amenaza resulta aún más grotesca

cuando se recuerda que Estados Unidos mantiene más de 800 bases militares alrededor del planeta, que su flota naval patrulla todos los océanos, que sus submarinos nucleares se despliegan rutinariamente frente a costas de decenas de países, y que ha intervenido militarmente en más de treinta naciones desde el fin de la Guerra Fría. Pero si Cuba permite una visita simbólica de un buque ruso –derecho soberano de cualquier país–, eso se convierte en «crisis de seguridad nacional». Doble rasero en estado puro.

El verdadero trasfondo de esta farsa es político y electoral, no estratégico. El actual inquilino del Despacho Oval necesita un enemigo externo para cohesionar a su base radicalizada en Florida. Díaz-Balart necesita justificar décadas de fracaso de su política de castigo. Y Hegseth, simplemente, obedece órdenes. La jugada es vieja y huele a retórica infundada: inventar una amenaza exterior para justificar agresiones que de otro modo serían ilegítimas. Ya lo

hicieron con las «armas de destrucción masiva» en Irak. Ahora reciclan el guion con los «barcos espía rusos» en Cuba.

Lo más patético del asunto es que ni siquiera intentan disimularlo. El mismo presidente de EE. UU. ya amenazó con tomar Cuba «casi de inmediato» una vez termine la guerra contra Irán. Es decir, reconocen abiertamente que no hay peligro real, solo una agenda de conquista. Y mientras tanto, el bloqueo petrolero asfixia a la población cubana, las sanciones se multiplican, y La Habana sigue sin representar peligro alguno para la seguridad de los estadounidenses –jamás lo ha sido– más allá de la paranoia fabricada por un puñado de políticos y exiliados radicalizados.

Cuba no es una amenaza para Estados Unidos. Nunca lo fue y nunca lo será. Es, en cambio, una víctima constante de la hostilidad sistemática del imperio más poderoso de la historia. Lo que Washington llama «amenaza» no es más que la voluntad de Cuba de ejercer su soberanía, de relacionarse con quien libremente decide, de no arrodillarse ni venderse. Y eso, para los que conciben el mundo como una finca propia, resulta intolerable.

Alerta medioambiental: el dilema de la arena

Los daños ecológicos, sociales y económicos podrían ser irreversibles. Urge la búsqueda de equilibrios

MARÍA JULIA MAYORAL

Empresas de diverso calibre extraen en conjunto alrededor de 50 000 millones de toneladas anuales de arena y grava para fines constructivos e industriales, dando cuenta de una práctica insostenible desde cualquier punto de vista.

Con la sustracción anual, podría construirse un muro de 27 metros de ancho y 27 metros de alto alrededor de toda la línea ecuatorial del globo terráqueo, explicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), al evaluar el desastre en curso.

Según recordó, la arena actúa como filtro natural del agua, protege las costas de la erosión, previene la salinización de los acuíferos costeros y proporciona hábitats cruciales para peces, plantas, tortugas, aves, cangrejos y otras especies de la flora y la fauna.

Aunque constituye un recurso finito, lo más probable es que su explotación crezca en los próximos años, a medida que los países inviertan en adaptación climática, expansión urbana e infraestructura, incluidas las obras para el uso de las energías renovables.

Playas artificiales, rascacielos, puertos y barreras contra inundaciones requieren enormes cantidades de arena y grava; pero su extracción desmedida de ríos, deltas y espacios costeros atenta contra los ecosistemas que protegen a las comunidades frente a las tormentas, la erosión y la intrusión salina, razonan los expertos.

«Ese es el dilema. Queremos la arena viva y muerta», señaló un directivo del Pnuma, Pascal Peduzzi, durante la presentación en Ginebra, Suiza, del informe Arena y sostenibilidad: un recurso esencial

para la naturaleza y el desarrollo, en mayo de 2026.

Las dimensiones del conflicto resultan alarmantes: a la altura de 2020, la magnitud física del entorno construido ya había superado la masa de toda la biomasa viva de la Tierra. Casi el 90 % de esa antropomasa está compuesta de arena y grava, utilizadas directamente para cimientos y carreteras, o indirectamente a través de hormigón, asfalto y vidrio, corroboró el análisis.

En un anterior examen –*Arena y sostenibilidad: 10 recomendaciones estratégicas para evitar una crisis*–, el ente de las Naciones Unidas abogó en 2022 por una norma internacional sobre cómo se extrae la arena de los mares.

Esto, valoró, podría suponer mejoras sensibles, pues la mayor parte del dragado marino se realiza mediante concursos públicos abiertos a compañías internacionales.

Para procurar un desarrollo sostenible en la Tierra, «tenemos que cambiar drásticamente nuestra forma de producir, construir y consumir productos, infraestructuras y servicios», señaló entonces Peduzzi.

«Si conseguimos controlar la forma de gestionar el material sólido más extraído del mundo, podremos evitar una crisis y avanzar hacia una economía circular», enfatizó.

Para los responsables políticos, el reto es claro: integrar la gestión sostenible de la arena en las agendas nacionales y regionales más amplias de medio ambiente y desarrollo; fortalecer los marcos de gobernanza, promover la innovación en la eficiencia de los materiales y los enfoques de economía circular, indicó el reporte de 2026.

Pese a los daños documentados, las prácticas sobre el terreno apenas han cambiado. De acuerdo

con el Pnuma, «la demanda sigue en aumento, la gobernanza permanece fragmentada y la extracción suele estar impulsada por una lógica cortoplacista, con actores que buscan beneficios económicos inmediatos mientras se acumulan los costos ambientales, sociales y económicos a largo plazo».

Los desafíos están por doquier. Por ejemplo, en el ámbito industrial, la extracción –asociada a grandes proyectos– suele estar liderada por corporaciones multinacionales y su financiamiento proviene de complejos acuerdos transnacionales, con limitada supervisión y escasos mecanismos de rendición de cuentas.

En el plano local, la extracción artesanal y a pequeña escala sigue estando muy dispersa y, en gran medida, informal; ello proporciona importantes oportunidades de ingresos, pero al margen de marcos regulatorios y de monitoreo ambiental eficaces.

«La crisis de la arena ya no es hipotética», asegura el Pnuma. A escala global, la escasez está paralizando importantes proyectos de infraestructura, y la demanda del surtido, solo en el sector de la construcción, podría subir un 45 % para 2060.

A diferencia de muchos desafíos ambientales, en los que la demora en la acción ha generado costos crecientes e irreversibles, aún existe la oportunidad de una intervención oportuna y coordinada, estima el organismo de las Naciones Unidas.

La gestión de los recursos naturales, enfatizó, es, «en última instancia, una decisión de desarrollo. La cuestión no es si se utilizará arena, sino cómo, cuánta, dónde y a qué costo para la naturaleza y la sociedad».